

del mes de Agosto de 1991, siendo las 18 horas, se reúnen los Sus. Miembros del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Sus. Castiñeira, Gasale, Navarro, Goyanèche, García y Larcono, bajo la presidencia del Dr. Aurelio Vid. Abierto el acto se consideró el ACTA de la reunión anterior, la cual se aprobó, y se ratificó expresamente la "DECLARACION de la ASOCIACION ARGENTINA de ESTUDIOS FISCALES" - Modificaciones Propuestas en Materia de Clausuras, que fuera elaborada por la Presidencia y la Secretaría de la Asociación, y que fue concen tuada con diversos Miembros, por razones de urgencia, y emitida. Dicha declaración dice así:

DECLARACION de la ASOCIACION ARGENTINA de ESTUDIOS FISCALES MODIFICACIONES PROYECTADAS EN MATERIA de CLAUSURAS.

Ante el reiterado propósito de las autoridades Nacionales, en el sentido de propiciar ante el Poder Legislativo la reforma del régimen de clausuras previsto en el ART. 44 de la LEY 11.683, esta Asociación quiere expresar a las autoridades Nacionales, y a la opinión pública en general, su oposición a dichos reformas, por considerar inconveniente la restricción del derecho de defensa que las nuevas medidas importarían, la cual se considera incompatible con la vigencia del estado de derecho, y fuente de irregularidades mucho peores que la situación que se intenta remediar con dicha función. Según lo indican estadísticos dados a conocer por el propio Sr. Sub. Secretario de Finanzas Públicas (conferencia pronunciada el día 4 de Junio de 1991, en el Seminario de la Cámara Argentina de Agencias y Casas de Cambio), de cada cien actos

de infracción labrados por los Inspectores actuantes, 50 de ellos son dejados sin efecto por la División Asuntos Jurídicos del ente recordador, 25 son dejados sin efecto por los jueces Administrativos, al aceptar las explicaciones dadas por los presuntos infractores, 12,5 son apelados y revocados por los Jus. Jueces Nacionales de Primera Instancia, y solo el 12,5% resulta confirmada. En consecuencia, volviendo a los actos originales, los Inspectores tienen un margen de error del 87,5%, mientras que los jueces Administrativos tienen sobre los clausuras que disponen, un margen de error del 50%. Son precisamente estos funcionarios, los que de acuerdo con la proyectada reforma, resolverían en última instancia la aplicación de la función de clausura ante la reiteración de una infracción a los exigencias del ART. 44. Como puede advertirse, la necesidad de que existan dos infracciones, para que el funcionario investido de las facultades de juez Administrativo pueda aplicar la función, sin apelación suspensiva de la ejecución ante la Justicia Nacional, resulta insustentable, puesto que tanto en uno como en otro caso los márgenes de error exceden de lo tolerable, notoriamente. En nuestro Sistema Constitucional, que figure el de la tradicional división de poderes, el Poder Ejecutivo tiene vedado ejercer funciones judiciales, ART. 95 de nuestra LEY FUNDAMENTAL, pero se ha admitido excepcionalmente que lo haga siempre y cuando la última decisión de la administración pública sea susceptible de una revisión por el Poder Judicial. Si esto es así en temas comunes de índole patrimonial, ello adquiere

mayor relevancia en los casos en que la cuestión se refiere a la aplicación de funciones que, como en el caso de la clausura de comercios, industrias, explotaciones agropecuarias o de prestación de servicios, constituye la clara aplicación de una norma de naturaleza penal. El hecho de que la legislación proyectada permita un recurso de apelación sin efectos suspensivos del cumplimiento de la función, no reúne los mínimos requisitos de constitucionalidad, toda vez que en los casos en que los Jueces no importan el criterio de quien ordenó la clausura, el fallo constituiría una victoria pírrica, atento que la función ya habría sido cumplida y el descrédito consecuente se habría producido. El interés del derecho es siempre el de evitar daños innecesarios a los inocentes, a la par que el castigo a los culpables. Pero la calificación de unos y otros no puede quedar en mano de los funcionarios de la administración, sin posibilidad de revisión judicial previa, talos que se presuma un propósito de escomiento general a costa de la justicia, lo cual resultaría inadmisible. La legislación vigente puede ser perfeccionada, para permitir que una vez firme la función, la fecha de cumplimiento de la misma pueda ser dispuesta por la Dirección General Impositiva con una mínima anticipación que asegure la efectividad de la misma. Asimismo, pueden establecerse mecanismos que permitan la rápida sustanciación de los casos judiciales. Pero siempre siguiendo el principio de que, en definitiva, sea un Juez de la Nación el que disponga el cumplimiento de la función, con las garan-

tios de imparcialidad e independencia que no cabe pue-
 mis en los funcionarios dependientes de la administra-
 ción activa, por definición sujetos a una relación
 jerárquica con el Poder Ejecutivo. De lo contrario, los
 buenos propósitos serían solo eso, y los contribuyentes
 quedarían sujetos a una discriccionalidad adminis-
 trativa que en muchos casos derivaría en arbitrarie-
 dad, alento los índices de enor señalados. Ello
 sin perjuicio de todas las acciones por daños y
 perjuicios que se iniciaron contra el Estado Nacio-
 nal en todos aquellos casos en los afectados por
 una injusta sanción consigan la revocación de
 ésta por parte de la Justicia Nacional, y persigan
 la justa reparación consiguiente, constituyéndose un
 factor de incremento del gasto público absolutamen-
 te inadmisibles, por ser posible evitarlos. La lucha
 contra la evasión siempre pesa por la ferocidad
 del derecho, y por la prudencia de los Jueces, ca-
 minos seguros para evitar excesos que redunden
 en contra de una adecuada educación tributaria.
 A continuación, se trataron problemas vinculados con
 la situación del personal de la Asociación, resolvién-
 dose reajustar las remuneraciones al mismo, con-
 forme con el criterio que se comunicó al Tr. Con-
 tador Castroman. Asimismo, se resolvió mantener
 en suspenso la adhesión al plan de jubilaciones
 privadas para empleados de comercio y actividades
 civiles, en razón de los cuestionamientos generaliza-
 dos que se han planteado y la discrepancia de
 opiniones respecto de su validez y carácter obliga-
 torio, aspectos sobre los cuales han aparecido forti-
 tados en distintos diarios, con opiniones opuestas.